San Juan de Pasto, 02 de septiembre de 2024

Doctora:

MARÍA CRISTINA LÓPEZ ERASO

JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO (NARIÑO)

E.S.D

REFERENCIA:	DEMANDA DECLARATIVA DE RESPONSABILIDAD DE EXTRACONTRACTUAL 2024-00131
DEMANDANTES:	JEFFERSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSAS, LILIANA JANNETH VALLEJO MAVISOY, quienes actúan en nombre propio y como representantes de su hijo; PABLO ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLEJO , menor de edad; Y BRAYAN ANDRÉS RODRÍGUEZ VALLEJO
DEMANDADOS:	FERNANDO ANDRES MOSQUERA NAVIA Y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

ASUNTO: *Descorre traslado de excepciones propuestas por MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.*

DANIELA ALEXANDRA ROJAS SOLARTE, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Pasto (Nariño), identificada con cédula de ciudadanía número 1.085.335.329 expedida en Pasto (Nariño), abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional número 375.016 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico: danielarojass.326@gmail.com; actuando en calidad de apoderada judicial de los demandantes, por este medio y de manera respetuosa, me permito descorrer traslado de las excepciones propuestas por la parte demandada MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, así:

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

En el caso que nos ocupa esta excepción, no está llamada a prosperar, toda vez que la pretensión de la demanda busca que la aseguradora claramente responda por el vínculo de contrato de seguro que tenía con el demandado **FERNANDO ANDRES MOSQUERA NAVIA**, pues es claro que la actividad peligrosa, no la estaba ejecutando directamente esta entidad, sino su asegurado.

Por lo tanto, se debe dar prioridad a la póliza de seguros anexa a la demanda en donde el contrato está debidamente probado y estaba vigente al momento del accidente. Así es importante señalar: Lo indicado en el artículo 1127 del Código de Comercio el seguro de responsabilidad, que es el que acá se está aplicando, consiste en “El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la Ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización”.

Por lo antes dicho es claro que la responsabilidad de la aseguradora es directa y por lo tanto debe declararse civilmente responsable, siendo que la función originaria del contrato de seguro es proteger el patrimonio del asegurado y también la de resarcimiento de la víctima quien tiene acción directa contra el asegurador, esto último en los términos establecidos en el artículo 1133 ibídem que a la letra dispone: “...<ACCIÓN DIRECTA CONTRA EL ASEGURADOR>. <Artículo subrogado por el artículo 87 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> **En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador.** Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con al artículo 1077, **la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador.**” (Negrilla y subrayas fuera de texto). Y este supuesto de hecho traído por la norma transcrita, opera plenamente en este asunto ya que se ha ejercido la acción directa en contra de la aseguradora Mapfre y en contra del causante del daño, a fin que en un solo proceso se declare la responsabilidad civil extracontractual de los demandados y en consecuencia se los condene a pagar las indemnizaciones a favor de la parte demandante, entendiéndose la reparación de la totalidad de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que se hayan causado, al estar plenamente acreditados los elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual que rodea esta litis, siendo aquellos el hecho constitutivo de la actividad peligrosa, el daño y el nexo de causalidad entre este y aquel, como en acápites siguientes se explicará.

Al respecto de la reparación integral de los daños en favor de las víctimas directa e indirectas, la Corte Suprema de Justicia, Cas. Civil mediante sentencia SC20950-2017 adoctrinó:

“(...) Cuando las normas de responsabilidad civil extracontractual aluden a la indemnización a favor de la víctima, es claro que refieren al resarcimiento de la totalidad de los daños que infirió la conducta o actividad atribuida al responsable, sean ellos de orden patrimonial o extrapatrimonial. (...) Así también se desprende del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, conforme al cual la valoración de daños debe atender el principio de reparación integral, de ahí que la obligación del juzgador sea ordenar la indemnización plena de los perjuicios padecidos por el damnificado.”¹

Obviamente que la condena que se imparta en contra de la aseguradora Mapfre a indemnizar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a mis poderdantes, deberá someterse a los lineamientos del contrato de seguro y hasta el límite del valor asegurado según la correspondiente póliza, sin olvidar que en esta clase de contratos, dicha Corporación Judicial en la aludida sentencia ha sostenido que, en caso de ambigüedad o imprecisión en las estipulaciones, la hermenéutica que se les dé debe preferir, antes que la elusión de riesgos, unos efectos adversos a quien la redactó y favorecedores a la parte que adhiere al clausulado, con el fin de superar cualquier inequidad y evitar el abuso de la posición dominante de la compañía aseguradora, que debe actuar con lealtad en cuanto a la fijación del nivel de responsabilidad asumida de conformidad con el artículo 1056 del Código de Comercio.

¹ Corte Suprema de Justicia Sentencia No. 20950-2017

2. INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RESPONSABILIDAD CIVIL. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR

La excepción propuesta por la aseguradora demandada, no está llamada a prosperar, por cuanto en el caso que nos ocupa, están demostrados los elementos que legal, jurisprudencial y doctrinalmente están establecidos, para que se configure la denominada responsabilidad civil extracontractual derivada de actividades peligrosas, eso sí aclarando que en esta clase de responsabilidad y conforme lo dispone el artículo 2356 del Código Civil, se presume la culpa del causante del daño quien ejecuta y controla la actividad peligrosa, por consiguiente el actor, víctima directa del daño, no tenía la carga de probar la culpa del conductor del automóvil de propiedad del demandado Fernando Navia causante del daño, pues se itera ésta se presume por el sólo hecho de haber estado ejerciendo una actividad peligrosa –conducción de su automóvil con el cual invadió el carril contrario por donde venía transitando la motocicleta ocupada por JEFFERSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSAS como conductor y BRAYAN RODRÍGUEZ como parrillero, y de forma infranqueable encendió las luces altas de su automóvil, deslumbró al motociclista y colisionó abruptamente contra su humanidad y los mandó al suelo, ocasionándole al conductor de la motocicleta graves lesiones en su cuerpo que desembocaron en secuelas de carácter permanente, restándole a la víctima directa demostrar el hecho constitutivo de la actividad peligrosa, el daño, y la relación causal entre este y aquel.

Lo antelado, se explica de la siguiente manera:

(i).- *El daño*, que conforme al historial clínico de JEFFERSON RODRÍGUEZ, los dictámenes rendidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el dictamen de la Junta que más adelante se menciona, consiste en la limitación de dorsiflexión de pie derecho y limitación en el movimiento de primer dedo de pie derecho, acortamiento de miembro inferior derecho, también Traumatismo del nervio peroneal profundo a nivel del pie y del tobillo, además de Dolor crónico intratable, dolor neuropático crónico. Por todo ello, se ha visto afectado con trastorno del sueño, aislamiento, anhedonia, tristeza, llanto fácil, ansiedad y depresión, de lo que da cuenta la valoración por medicina laboral consignada en el dictamen de pérdida de capacidad laboral y ocupacional emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño el 17/02/2024 y su historia clínica de Psicología. Todo esto le ocasionó una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 36.75% según se deriva del dictamen pronunciado por dicha Junta.

(ii).- El hecho constitutivo de la actividad peligrosa: la conducción de un automóvil como el que conducía el señor Fernando Navia al momento de ocurrencia del accidente, sin lugar a dudas es una **actividad peligrosa**.

(iii).- El factor jurídico de atribución del resultado al demandado, por ser guardián del automotor que produjo el daño, así como de la actividad peligrosa, y garante del deber de evitar causar perjuicios a terceros al ejecutar dicha actividad.

(iv).- El nexo de causalidad: es evidente su concurrencia, dado que existe relación causal entre la actividad peligrosa ejercida por el conductor del automóvil y los perjuicios causados al motociclista, pues mientras ejecutaba la referida actividad peligrosa, realizó una conducta imprudente al invadir de manera deliberada el carril contrario por donde transitaba el motociclista, abruptamente encendió sus luces altas para deslumbrarlo y chocar contra su humanidad, sin haber tomado las medidas de cuidado y diligencia que esa conducta peligrosa le exigía para evitar causar daños a otras

personas, siendo la única y determinante causa adecuada del resultado final, por lo que produjo tales perjuicios.

“La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el Código Nacional de Tránsito, en ninguno de sus apartes, limita el valor probatorio ni del informe de tránsito ni del croquis. Además, ha mencionado que la valoración probatoria debe regirse por el sistema de apreciación racional, según el cual no existen reglas previas que le digan al juez qué mérito debe asignarle a ciertos documentos, sino que este debe analizar todas las pruebas en conjunto y “definir su poder de convicción, con un criterio sistemático, razonado y lógico, orientado por las reglas del sentido común, la ciencia y las máximas de la experiencia²

Por otra parte, no es dable decir fue culpa de mis representados; como dice la jurisprudencia de las altas cortes la culpa se presume por parte de la persona que realiza la maniobra peligrosa, sin tener el debido cuidado y precaución. Toda vez que de manera imprudente e intencional el señor Navia decidió invadir con su automóvil el carril contrario por donde venía transitando la motocicleta, abruptamente encendió sus luces altas para deslumbrarlo y chocar contra su humanidad, sin haber tomado las medidas de cuidado y diligencia que esa conducta peligrosa le exigía para evitar causar daños a otros vehículos o peatones, causando el daño del que debe ser responsabilizado y entrar a reparar. Aunado a que, en el mismo IPAT se consignó que la vía donde sucedió el siniestro es de doble sentido y tiene dos carriles, entonces es plenamente aplicable el supuesto de hecho traído por el parágrafo 2º del artículo 60 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, el que fue transgredido por el accionado y que a la letra señala: “...Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones. (...)”³

Finalmente, vale decir que la sola infracción de tránsito consistente en no contar con la licencia de conducción, no basta para inferir que el motociclista fue el autor exclusivo del accidente, pues haciendo la correlación de imputación entre esa infracción y el resultado lesivo, se concluye sin lugar a equívocos que, por más que éste hubiese contado con la aludida licencia, no hay ningún motivo que permita suponer que el accidente se produjo por no portar la misma, toda vez que contando o no con ella, de igual modo hubiera sido atropellado por el automóvil conducido por Fernando Navia que invadió de manera deliberada e imprudente el carril por donde el motociclista transitaba, sorpresivamente y al encender sus luces altas con las que lo encandiló y colisionó de frente con éste, catalogándose esta última conducta como la única causa adecuada que provocó el daño al demandante RODRÍGUEZ ROSAS, ello por cuanto del IPAT no es posible derivar el más mínimo indicio de que el motociclista infringió sus deberes de prudencia, amén que en el mismo se consignó como hipótesis del accidente que el automóvil de propiedad del demandado invadió el carril contrario.

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 23 de junio de 2015, radicación: 70215-31-89-001-2008-00156-01. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez.

³Código Nacional de Tránsito- parágrafo 2º del artículo 60

No obstante, lo anterior, es el honorable juez quien deberá con las pruebas obrantes en el sumario decidir el resultado del proceso sin restarle importancia a lo aportado, emitiendo sentencia que declare la responsabilidad deprecada en cabeza de los demandados y en virtud del mandato imperativo establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, ordenar pagar en favor de los demandantes las indemnizaciones que por concepto de daños patrimoniales y extrapatrimoniales se les ha causado por parte del asegurado, propendiendo por una reparación integral de perjuicios a las víctimas del siniestro.

3. INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO DE PLACAS GDP869

La excepción propuesta carece de validez para prosperar, pues es claro que en el escrito de la demanda se exponen los hechos y fundamentos que no son simples o meras apreciaciones, son circunstancias que llevan al convencimiento del juez con las pruebas obrantes en el proceso y más aún cuando no existe duda, según lo expuesto en el plenario que el accidente de fecha 27 de mayo del año 2022, ocurrió, que en debate probatorio se profundizará y se visibilizará que en el caso en concreto se generó un daño por la culpa y la falta de deber de cuidado del señor Fernando Andrés Mosquera Navia, mas aun cuando claramente el mismo IPAT establece que el lado de la vía por donde éste transitaba estaba en mal estado, presentaba huecos y fisuras, no siendo aceptable que se diga en sustento de esta excepción que, “la falta de pericia en el manejo impidió que el afectado Jefferson Rodríguez, pudiera sortear el encuentro con la camioneta, desencadenando así el hecho que generó las lesiones”: esta situación deja entrever un argumento totalmente infundado y carente de sustento jurídico y probatorio, en tanto lo que se evidencia no solamente del IPAT sino de las imágenes insertas en la contestación de la demanda del señor Fernando Navia, es que al presentar la vía huecos y fisuras, esa misma situación exigía del demandado quien conducía su automóvil, tener mayor cuidado y diligencia al transitar por esa vía y al pasar de un carril a otro para evitar de esa forma poner en peligro a terceros. Por tanto, no se justifica que, de manera imperiosa e imprudente, el demandado haya invadido el carril contrario (IPAT 104), pues para ello el demandante debió tener la debida precaución y cautela del caso. El estado de la vía era un hecho evidente y previsible, al cual podía resistir; el estado de la vía no era ajeno al demandado, que lo obligaba a transitar con mayor cuidado y diligencia, contrario a ello decidió invadir el carril contrario en forma imprudente e imperiosa, y luego de haber encendido de forma abrupta las luces altas de su automóvil con las cuales deslumbró al motociclista, chocó de frente con la misma donde venía transitando como conductor JEFFERSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSAS y como parrillero su hijo BRAYAN RODRÍGUEZ VALLEJO, ocasionando el resultado dañoso, el cual mi prohijado y su familia no tienen ni tenían el deber de soportar.

4. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO

El exceptivo de liberación por caso fortuito, no debe prosperar, en el entendido de que, el hecho de que la vía se encontraba en mal estado, no fue esta la causa que generó el grave accidente en el cual mis representados resultaron lesionados en su integridad física, moral y psicológica. Es Fácil atribuir un hecho a las malas condiciones de una vía, cuando fue el hombre quien no tuvo la debida precaución de un hecho evidente, es decir al ser visible que tales condiciones viales lo obligaban a transitar por un carril contrario, el deber ser llama a tener el debido cuidado en este tipo de maniobras para evitar poner en peligro a otras personas.

El artículo 2356 del Código Civil, expresa que en este tipo de responsabilidad, la culpa se presume en favor de la víctima y debe existir un medio de prueba idóneo que demuestre que existe un eximente de responsabilidad, situación que en caso que nos ocupa NO sucede, pues es claro que actuar “diligente” no prevé se genere un daño.

Así es importante traer a colación que: el caso fortuito o fuerza mayor, como causal de eximente de responsabilidad se presenta siempre y cuando el hecho soporte dos análisis: (i) de imprevisibilidad; y, (ii) de irresistibilidad.

“Sobre el particular, el alto Tribunal ordinario en lo civil, mediante sentencia SC065-2023, donde retoma varios pronunciamientos acerca del tema, enseñó que “Imprevisibilidad e irresistibilidad son, pues, los dos elementos que, in casu, permiten calificar la vis maior o casus fortuitus, ninguno de los cuales puede faltar a la hora de establecer si la situación invocada por la parte que aspira a beneficiarse de esa causal eximente de responsabilidad, inmersa en la categoría genérica de causa extraña, puede ser considerada como tal.”⁴

Conforme con lo anterior, es palmario que la situación alegada por la apoderada judicial de la aseguradora demandada, consistente en las malas condiciones de la vía donde ocurrió el accidente de tránsito, no se constituye como causal de fuerza mayor o caso fortuito, en tanto, respecto a dicho acontecimiento era posible contemplar su ocurrencia en condiciones de normalidad, por cuanto las malas condiciones de la vía ya se encontraban presentes en aquella pudiendo ser humanamente previstas, lo que obligaba al prenombrado demandado a asumir una conducta prudente actuando con mayor cuidado y diligencia al transitar con su vehículo por allí para evitar causar un daño a otro como acá sucedió al invadir el carril contrario de manera deliberada e imperiosa, abruptamente encender las luces altas de su automóvil con las que encandiló al motociclista y chocando contra su humanidad causándole los daños ahora reclamados : Con ello se desvirtúa el carácter intempestivo o sorpresivo que caracteriza al hecho que se pretende alegar como constitutivo de fuerza mayor. Tal conclusión, se desprende del contenido del IPAT y del análisis efectuado sobre el aludido acontecimiento, aplicando los tres criterios fijados por dicha Corporación Judicial para determinar si el mismo es imprevisible, a saber: “1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo” (Sentencia de 23 de junio de 2000, exp.: 5475). A la par con ello, también debe considerarse que atendiendo a los referidos requisitos de Imprevisibilidad e irresistibilidad, dicha Corte ha puntualizado que, si “el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor... (G. J. Tomos. LIV, página, 377, y CLVIII, página 63)

Lo antelado es suficiente para desestimar este medio exceptivo.

5. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA

No puede predicarse culpa exclusiva de la víctima, cuando la conducta de falta de documentación de mi representado, no fue el móvil principal que incidió en la ocurrencia del accidente de tránsito de fecha 27 de mayo del año 2022. La sola contravención de tránsito, como la mencionada por la

⁴ Corte Suprema de Justicia Sentencia 065-2023

apoderada de la aseguradora (no contar con licencia de conducción) haya generado el resultado lesivo, sin lugar a equívocos que, Por más que éste hubiese contado con tal documento, no hay ningún motivo que permita suponer que el accidente se produjo por no portar aquella licencia, toda vez que contando o no con la misma, de igual modo hubiera sido atropellado por el automóvil conducido por Fernando Navia que invadió de manera imprudente el carril por donde el motociclista transitaba, sorpresivamente encendiendo las luces altas de su automóvil con lo cual lo deslumbró y colisionó de frente. catalogándose esta última conducta como la única causa adecuada que provocó el daño al demandante RODRÍGUEZ ROSAS, ello por cuanto del IPAT no es posible derivar el más mínimo indicio de que el motociclista infringió sus deberes de prudencia, amén que en el mismo se consignó como hipótesis del accidente que el automóvil de propiedad del demandado invadió el carril contrario. A la par con lo precedente, debe anotarse que conforme a las reglas de la experiencia, por más pericia en la conducción de vehículos que una persona tenga, frente a la invasión de su carril de manera deliberada e imperiosa y el hecho de que el automóvil invasor abruptamente encienda las luces altas con las que encandila al otro conductor y sin que dicho automóvil detenga la marcha, como ocurrió en este asunto, no le es posible reaccionar oportunamente para eludir el vehículo invasor, por lo sorpresivo del acto de invasión en esas condiciones que no le da tiempo para ello.

Además, en relación con la causalidad adecuada, como herramienta que permite a los jueces desentrañar las causas que originaron el daño en la responsabilidad derivada de actividades peligrosas, de donde debe seleccionarse las jurídicamente relevantes, la Corte Suprema de Justicia, Cas. Civil ha sostenido:

“En el campo del derecho la cadena causal no se toma en su estricto sentido naturalista, sino que se encuentra impregnada de una serie de valores culturales que permiten escoger, de entre una serie de hechos, sólo aquéllos que resultan verdaderamente relevantes para endilgar responsabilidad; de ahí que se hable de una causalidad adecuada” (SC, 14 dic. 2012, rad. n° 2002-00188-01; reiterada SC, 9 dic. 2013, rad. n° 2002-00099-01)⁵.

6. EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS ENFRENTADAS

No es una excepción que deba prosperar, porque si bien es ciertos ambas partes ejercían lo que se puede denominar actividades peligrosas lo cierto es que, el siniestro de fecha 27 de mayo del año 2022, se originó por la culpa del señor FERNANDO ANDRES MOSQUERA NAVIA, quien sin el debido deber de cuidado invade con su automóvil el carril contrario de manera intencional e imperiosa por donde transitaban mis representados en su motocicleta, por lo que no le dio al conductor de este último vehículo capacidad de reacción para evitar el accidente dada la invasión de su carril en forma imprudente y el hecho de que sorpresivamente encendió las luces altas de su automóvil con las que lo deslumbró y sin que dicho automóvil detuviera la marcha. No obra prueba en el plenario que acredite que mi poderdante no contaba con la experiencia de manejar este tipo de vehículo, pues es evidente que iba por el carril que a él le corresponde y quien lo invade es el hoy demandado en forma imprudente dejándolo sin capacidad de reacción como antes se expuso, así el actuar del conductor de la motocicleta en ningún momento fue negligente o imprudente, Es evidente que la culpa es del demandado y el hecho acusable no exime de responsabilidad, pues el grado de peligrosidad fue el

⁵ Sentencia SC, 14 dic. 2012, rad. n° 2002-00188-01; reiterada SC, 9 dic. 2013, rad. n° 2002-00099-01

hecho de invasión del carril contrario realizado de manera deliberada e imperiosa por el señor Navia en las condiciones antes expuestas, mismo que contribuyo potencialmente al accidente⁶. Al ser del conocimiento del eventual peligro que ello conllevaría si no se hace con la debida diligencia y cuidado. La contravención de tránsito al que refiere en la contestación, en nada contribuyó al resultado dañoso. El actuar negligente del señor Fernando Navia, desatendió el principio de confianza legítima que opera en actividades peligrosas como lo es la conducción de automotores, el cual exigía al demandado que antes de realizar el paso de un carril a otro, así como lo efectuó al momento del accidente, debía hacerlo de forma que no ponga en peligro a los demás vehículos o peatones, situación regulada por el parágrafo 2º del artículo 60 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito Terrestre. Contrario a ello, el mentado motociclista sí respetó el referido principio al transitar por su carril derecho, y se itera que dada tal invasión de su carril por parte del automóvil del señor Navia, neutralizó su capacidad de reacción dadas las circunstancias previamente anotadas.

7. SOBRE ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL DEMANDANTE Y DE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS MISMOS

La estimación y cuantificación de todos y cada uno de los perjuicios se hizo de acuerdo a los parámetros dados por la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con los daños sufridos por las víctimas, mismo que se prueba con los documentos anexos a la demanda y que de igual manera en la etapa procesal oportuna se le presentará por ende no es un medio que deba prosperar sin antes abrir el debate probatorio.

Lo anterior se afianza si se tiene en cuenta que la citada Corporación Judicial, explicando lo regulado por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 atinente a la valoración de perjuicios de toda índole sean patrimoniales o extrapatrimoniales-, fijó que “el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuatoria de los perjuicios que sufre la víctima y le son jurídicamente atribuibles al demandado, de suerte que el damnificado retorne a una posición lo más parecida posible a aquella en la que *habría estado* de no ser por la ocurrencia del hecho dañoso. De ahí que la reparación integral y equitativa signifique tanto la obligación legal de resarcir todos los daños ocasionados a la persona o bienes del lesionado, como la restricción de no sobrepasarlos, pues la indemnización no es en ningún caso fuente de enriquecimiento.”

Concordante con lo precedente, debe estimarse en este asunto que conforme lo tiene adocinado la Corte Suprema de Justicia, Cas. Laboral, el hecho de que en casos como el presente, la parte demandante no acredite que laboraba para la época de los hechos del accidente de tránsito, no incide en la concesión del lucro cesante, pues el mismo es procedente ordenarlo a cargo de los demandados, debido al mandato de reparación integral de perjuicios de que trata el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 en los casos en que una persona haya sufrido daños patrimoniales o extrapatrimoniales, aunado a que en estos eventos y más aún si se acredita la pérdida de capacidad laboral dicho rubro debe liquidarse con el salario mínimo legal mensual vigente. Así lo expresó el mentado alto Tribunal en la sentencia SC5340-2018:

“(…) El ad quem negó la reparación pretendida por no haberse «comprobado que la víctima estaba en el momento [de la colisión automotriz] ejerciendo o desarrollando actividad productiva, o lo que

⁶Tribunal Superior De Distrito Judicial Santa Rosa De Viterbo Sala Única Sentencia 24 de septiembre De 2021

es igual, que cuando sobrevino el accidente, trabajaba y obtenía una contraprestación por ello (salario)» (folio 58 del cuaderno 8). // Tal colofón, ciertamente, desatiende el principio de reparación integral, reconocido normativamente en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, el cual ordena «que al afectado por daños en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior..., y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez ‘tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio’ (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01)» (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.º 2009-0014-01). // Y es que, el actual entendimiento jurisprudencial de esta máxima, en punto a la indemnización por lucro cesante, ordena que, una vez demostrado que existió una afectación negativa al ejercicio de un actividad productiva, debe procederse al restablecimiento patrimonial del agraviado, para lo cual bastará la prueba de la aptitud laboral y, para fines de cuantificación, la remuneración percibida, sin perjuicio de que esta última sea suplida por el salario mínimo legal mensual vigente. (...) Demostrado, entonces, que se causaron perjuicios no se puede dictar fallo exonerando de la condena bajo el argumento de que no obra demostración de la cuantía del mismo ni tampoco se puede morigerar o amainar su monto predicando de manera simple y rutinaria que no hay forma de acreditar una superior, razón por la cual tiene que acudir a deducir como retribución por los servicios prestados la correspondiente al 'salario mínimo legal' (sentencia de 24 de noviembre de 2008, exp.1998-00529-01) (SC, 21 oct. 2013, rad. n.º 2009-00392-01). (...) Por tanto, exigir al afectado que demuestre el desarrollo de un laborío redituable para acceder a su pretensión, a pesar de encontrarse acreditada la pérdida de capacidad laboral -temporal o permanente-, «desconoce la existencia de [esta] capacidad... en toda persona humana que como atributo indestructible forma parte de su misma sustantividad existencial. La plena capacidad cordial (incluyendo la mental, puesto que concebidos al hombre como un ser único e indiviso) y por lo tanto, su habilidad, siempre entraña la posibilidad de que luchará y buscará la forma de obtener, así sea, exclusiva y egoístamente su propio sustento para sobrevivir sin solidaridad con su familia» (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.º 2000-00196-01)»

Lo antelado es suficiente para despachar desfavorablemente esta excepción.

8. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO SE ENCUENTRAN CONDICIONADAS A LO PACTADO Y DISPONIBILIDAD DE VALOR ASEGURADO

Dentro de caso que nos ocupa es evidente decir que es cierto y claro el vínculo jurídico que existe entre la aseguradora y el asegurado, por lo que es de precisar que lo que les asiste a mis representados es que sean reparados de manera integral, la valoración de aquellos límites los debe fijar el juez.

Por lo tanto, no son medio que deban ponerle fin al proceso, sino por el contrario son circunstancias que deben resolverse en las etapas siguientes del proceso. Pues es más que evidente que existe la póliza de seguros No. 1901119003513 en la que figura como tomador, asegurado y beneficiario el señor Fernando Andrés Mosquera Navia con cobertura para Responsabilidad Civil Extra contractual entre otras, derivada del manejo del vehículo de placas GDP869, por lo tanto, es cumplimiento del objeto contractual esta llamada a responder lo que como se manifiesta es Ley para las partes, cuando se habla de límites, es cierto que lo mismos se encuentran fijados en el acuerdo privado de seguro,